

C.A. de Santiago

Santiago, once de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece Carlos Peña González, abogado, en representación de la Universidad Diego Portales, interponiendo recurso de protección en contra del Consejo Nacional de Educación, por haber dictado el Oficio N°339/2024, de fecha 4 de diciembre de 2024, mediante el cual se declaró inadmisibile el recurso de apelación presentado por la Universidad en contra de la Resolución de Acreditación Institucional N°779 de la Comisión Nacional de Acreditación. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución Política de la República.

Expone que, el 5 de mayo de 2023, la Universidad Diego Portales inició voluntariamente un proceso de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación. Agrega que, tras la evaluación correspondiente, el 15 de noviembre de 2023, la Comisión Nacional de Acreditación decidió acreditar a la Universidad, en el nivel de excelencia, por un período de 6 años, decisión que fue formalizada mediante la Resolución de Acreditación Institucional N°764, de 6 de marzo de 2024.

Explica que, frente a esta decisión, el 18 de marzo de 2024, la Universidad presentó un recurso de reposición ante la Comisión Nacional de Acreditación, solicitando una mayor fundamentación de la decisión y que fuese acreditada por 7 años, fundándose en que se habrían ponderado incorrectamente los antecedentes aportados y desconociendo los avances sistemáticos alcanzados en áreas claves. Sin embargo, mediante la Resolución N°779 de 8 de octubre de 2024, la Comisión, desestimó el recurso y mantuvo los juicios evaluativos originales, sin que ello incidiera en el número de años de acreditación otorgados.

Ante esta situación, el 2 de diciembre de 2024, la Universidad interpuso un recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Educación, conforme al artículo 23 de la Ley N°20.129, exponiendo los errores e inexactitudes en los juicios evaluativos de la Comisión Nacional de Acreditación. No obstante, mediante el Oficio N°339/2024, de 4 de diciembre de 2024, el Consejo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SCUWXWXYJW

Nacional de Educación, declaró inadmisible el recurso, fundado en carecer de competencia para tramitar apelaciones respecto del número de años de acreditación, limitando su competencia solo a los casos de denegación de acreditación establecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley N°20.129.

Sostiene que el acto impugnado incurre en una manifiesta ilegalidad, porque el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, siempre ha considerado al Consejo Nacional de Educación como instancia de apelación de las decisiones sobre acreditación institucional, conforme al artículo 87 letra h) del Decreto con Fuerza de Ley N°2. Alega que el Oficio N°339/2024 carece de fundamento legal y es fruto de una interpretación formalista del artículo 23 de la Ley N°20.129, que proviene de una equivocación legislativa en la numeración de artículos, posteriormente corregida por la Ley N°21.091.

Afirma que la interpretación del Consejo Nacional de Educación, basada en dictámenes de la Contraloría General de la República, es equivocada al contener una lectura literal, sin atender al espíritu del legislador, que fue erigir al Consejo recurrido como instancia de revisión de todas las decisiones de acreditación institucional. Plantea que esta necesidad se hace más patente con la Ley N°21.091, que vinculó los años de acreditación con el acceso al financiamiento estatal y el factor de reajuste del arancel regulado.

Asevera que el acto vulnera el principio de razonabilidad del artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al impedir el acceso a una instancia de revisión técnica y especializada, y el principio de impugnabilidad de los actos administrativos, dejando a la Universidad en indefensión. Asimismo, sostiene que es doblemente arbitrario al generar un tratamiento diferenciado injustificado respecto de otras instituciones que sí pueden apelar bajo otras hipótesis, y al desconocer la jurisprudencia de los Tribunales Superiores que han reconocido la competencia del Consejo para revisar decisiones sobre años de acreditación.

En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, según el recurso, el actuar del Consejo Nacional de Educación vulnera el derecho de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al generar una diferencia arbitraria entre instituciones en situaciones equivalentes; infringe el



derecho a no ser juzgado por comisiones especiales del artículo 19 N°3 inciso 5°, al renunciar a su competencia legal y actuar como comisión especial; y la libertad de enseñanza del artículo 19 N°11, en sus dimensiones de "organizar" y "mantener" establecimientos educacionales, al impactar el proyecto educativo con efectos institucionales y patrimoniales relevantes, considerando que los años de acreditación inciden en el financiamiento institucional y el factor de reajuste arancelario.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso y, se deje sin efecto el Oficio N°339/2024, ordenándose al Consejo Nacional de Educación admitir a tramitación el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N°779, con expresa condena en costas del recurrido.

SEGUNDO: Que el Consejo Nacional de Educación evacué el informe requerido exponiendo detalladamente los fundamentos de hecho y de derecho que justifican el rechazo del recurso de protección interpuesto.

En primer término, explica que la decisión adoptada mediante Oficio Ordinario N°339, de 4 de diciembre de 2024, se encuentra plenamente ajustada a derecho, toda vez que el artículo 23 de la Ley N°20.129, establece de manera taxativa que únicamente pueden ser objeto de apelación ante el Consejo Nacional de Educación las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación "en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes", esto es, los artículos 21 y 22 de dicho cuerpo normativo.

Sostiene que la situación de la Universidad Diego Portales, que obtuvo acreditación, en nivel de excelencia, pero por un plazo menor al máximo posible, se encuentra regulada por el artículo 20 de la referida ley, hipótesis que no resulta comprendida dentro del ámbito de competencia del Consejo Nacional de Educación para conocer recursos de apelación.

Asimismo, fundamenta su posición en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, particularmente en los Dictámenes N°36.412-2010 y N°E316718, de 28 de febrero de 2023, los cuales han establecido de manera categórica que, el Consejo Nacional de Educación, carece de competencias para conocer recursos de apelación cuando estos sean interpuestos para impugnar decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación relativas al número de años por los cuales se concede la



acreditación institucional. En este sentido, destaca que la Contraloría ha precisado que no resulta procedente que, por vía interpretativa, se atribuya al Consejo Nacional de Educación facultades que no le han sido expresamente conferidas por el legislador, debiendo cualquier ampliación de competencias ser abordada a través de un cambio legislativo.

Por otra parte, su representada invoca antecedentes provenientes de la historia legislativa para reforzar su argumentación. Específicamente, refiere la indicación presentada por la Senadora Yasna Provoste durante la tramitación de la Ley N°21.186, mediante la cual se pretendía reemplazar la expresión "dos artículos precedentes" por "artículos 20 y 22 de la presente ley", indicación que fue declarada inadmisibile por estimarse que confería una nueva función al Consejo Nacional de Educación, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República conforme al artículo 65 inciso 4° N°2 de la Constitución Política. Este antecedente demuestra fehacientemente que nunca ha existido voluntad legislativa para extender las hipótesis de apelación a los casos de acreditación por menor número de años del máximo.

Respecto al derecho a la igualdad ante la ley, sostiene que no existe diferencia arbitraria alguna, sino una distinción razonable y proporcionada establecida por el legislador, que responde a la necesidad de mantener el equilibrio institucional entre organismos descentralizados sin vínculo orgánico entre sí. Manifiesta que el recurso sui generis de apelación ante el Consejo Nacional de Educación constituye un plus recursivo que no obsta al régimen general de recursos administrativos y judiciales, por lo que las instituciones de educación superior no quedan en situación de indefensión.

En relación con el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, argumenta que la mera declaración de incompetencia por parte del Consejo Nacional de Educación no puede configurar el establecimiento de una comisión especial, toda vez que esta garantía requiere siempre de una actuación positiva del órgano, arrogándose facultades que no posee, lo que no ocurre en la especie donde el Consejo se abstiene de actuar por carecer de competencia legal.

En cuanto de la libertad de enseñanza, sostiene que su ejercicio se encuentra legítimamente regulado por el marco normativo diseñado a partir de la Constitución Política, sin que la decisión impugnada afecte el núcleo



esencial de este derecho, consistente en la definición y orientación del proyecto institucional.

Adicionalmente, advierte sobre las consecuencias inconstitucionales que se derivarían de acoger este recurso. En primer lugar, porque infringiría las normas constitucionales de distribución de competencias públicas, toda vez que ampliar las posibilidades de revisión del Consejo Nacional de Educación atentaría contra las funciones específicas y la autonomía técnica que la ley establece en favor de la Comisión Nacional de Acreditación, destruyendo los principios de especialización que sustentan el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. En segundo término, porque afectaría la lógica sistémica del referido sistema, el cual ha distribuido funciones específicas en diversos organismos públicos técnicamente habilitados para ejercerlas. Finalmente, sostiene que se debilitaría el sistema de control judicial de los actos administrativos, toda vez que los tribunales juzgarían la actuación de un órgano administrativo autónomo solo después de que otro órgano administrativo también autónomo hubiera revisado dicha actuación.

En virtud de los fundamentos expuestos, solicita el total rechazo del recurso de protección interpuesto, por no verificarse ninguno de los supuestos normativos que hacen procedente esta acción constitucional.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el acto que se tilda como arbitrario e ilegal es el Oficio N°339 de 4 de diciembre del año 2024, por el que el Consejo Nacional de Educación, declaró inadmisibile el recurso de apelación deducido por la Universidad Diego Portales en contra de la Resolución Exenta – N° 764, por la que la Comisión Nacional de Acreditación, si bien le otorgó la acreditación, solo se lo hizo por el término de seis años, en circunstancias que lo había solicitado por siete años.



QUINTO: Que, para determinar si la recurrida actuó dentro de sus facultades al decidir que el recurso de apelación era inadmisibile porque la ley no lo contempla, para aquellos casos, en que se concede la acreditación por un lapso inferior a aquel que lo pidió el Establecimiento de Educación Superior, se analizará lo siguiente.

Para tales efectos, deben traerse a colación las normas atinentes a la materia:

LEY 20.129: “ESTABLECE UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”

Artículo 20:

Se otorgará la acreditación institucional a las instituciones de educación superior que cumplan con los criterios y estándares de las dimensiones referidas en el inciso tercero del artículo 17, teniendo en consideración su misión y proyecto institucional. La acreditación institucional podrá ser de excelencia, avanzada o básica, en conformidad con los niveles de desarrollo progresivo que evidencien las instituciones.

En su pronunciamiento, la Comisión señalará el plazo en que la institución deberá someterse a un nuevo proceso de acreditación, el que podrá ser de 6 o 7 años en el caso de la acreditación de excelencia, de 4 o 5 años en la acreditación avanzada y de 3 años en la acreditación básica, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente. Con todo, sólo podrán someterse a un nuevo proceso de acreditación en un plazo de 7 años aquellas instituciones que cuenten con acreditación de la dimensión de investigación, creación y/o innovación.

Las instituciones reconocidas por el Estado acreditadas en el nivel básico sólo podrán impartir nuevas carreras o programas de estudio, abrir nuevas sedes, o aumentar el número de vacantes en alguna de las carreras o programas de estudio que impartan, previa autorización de la Comisión. Asimismo, la acreditación institucional básica sólo podrá otorgarse de forma consecutiva por una vez.

La resolución final del proceso de acreditación institucional deberá contener un pronunciamiento respecto del Plan de Mejora del que trata el artículo 16 de la presente ley. El cumplimiento del Plan de Mejora será



especialmente considerado por la Comisión en el siguiente proceso de acreditación institucional.

Artículo 21.-

Eliminado.

Artículo 22.-

No se otorgará la acreditación institucional a las instituciones de educación superior que no cumplan con los criterios y estándares de calidad, según lo dispuesto en el artículo 20.

Tampoco se otorgará la acreditación institucional a aquellas instituciones de educación superior que, habiendo obtenido por una vez consecutiva la acreditación institucional básica, no obtuvieren en el siguiente proceso al menos la acreditación avanzada.

Las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado no acreditadas quedarán sujetas a la supervisión del Consejo Nacional de Educación por un plazo máximo de tres años, contado desde el pronunciamiento de no acreditación por parte de la Comisión. Para estos efectos, el Consejo podrá ejercer las funciones del artículo 87 del decreto con fuerza de ley N° 2, del 2009, del Ministerio de Educación, en lo que sea aplicable, y solicitar a la respectiva institución de educación superior la información que estime pertinente.

Las instituciones de educación superior referidas en el inciso anterior no podrán impartir nuevas carreras o programas, ni abrir nuevas sedes, ni aumentar sus vacantes. Asimismo, no podrán matricular nuevos estudiantes, salvo que cuenten con autorización previa del Consejo Nacional de Educación.

En caso de que la institución tenga carreras y programas de pre y posgrado acreditados, de conformidad con lo establecido en los títulos III y IV siguientes, aquéllos perderán su acreditación.

Si al término del plazo señalado en el inciso tercero la institución no acreditada no obtiene al menos la acreditación institucional básica, el Consejo deberá informar al Ministerio de Educación para que éste dé curso a la revocación del reconocimiento oficial y al nombramiento de un administrador de cierre. Lo mismo aplicará en caso de que, durante el transcurso del referido plazo, el Consejo, en acuerdo adoptado por la mayoría



de sus miembros en sesión convocada a ese solo efecto, considere que la institución no cuenta con las condiciones mínimas necesarias para subsanar las observaciones que dan cuenta del incumplimiento de los criterios y estándares de calidad.

En los casos regulados en el presente artículo, la Comisión Nacional de Acreditación deberá notificar al Ministerio de Educación de la no acreditación institucional dentro de los tres días hábiles siguientes a la dictación de la resolución respectiva.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las instituciones de educación superior señaladas en la letra d) del artículo 52 del decreto con fuerza de ley N° 2, del 2009, del Ministerio de Educación.

Artículo 23.-

La institución de educación superior afectada por las decisiones que la Comisión adopte en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes podrá apelar ante el Consejo Nacional de Educación, dentro del plazo de treinta días hábiles a contar de la notificación de la resolución recurrida, salvo que se trate de una institución que se encuentre en supervisión por el mismo. Lo anterior, no obstará a la interposición del correspondiente reclamo ante la misma Comisión.

Admitida la apelación a tramitación, el Consejo solicitará informe a la Comisión la que deberá evacuarlo en un plazo de 10 días hábiles.

El Consejo Nacional de Educación se pronunciará por resolución fundada sobre la apelación dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde la presentación del recurso.

DECRETO CON FUERZA DE LEY N°2

Artículo 87:

Serán funciones del Consejo, en materia de educación superior:

Letra h) *Servir de instancia de apelación respecto de las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad a la ley N° 20.129.*

SEXTO: Que del análisis del artículo 23 de la ley N°20.129, se desprende que cuando prevé el recurso de apelación para aquellos casos a que se refieren “los dos artículos precedentes”, se alude necesariamente a los artículos 20 y 22, toda vez que resulta improcedente entender que se haga referencia a su artículo 21, ya que este fue eliminado por el artículo 19



bis de la ley N°21.091, de 29 de mayo del año 2018. En consecuencia, sí es apelable la decisión si no se otorga la acreditación por el lapso en que fue solicitado, cuyo es el caso de autos.

SEPTIMO: Que dicha conclusión aparece corroborada por la historia fidedigna de la ley 20.129 que, consagraba la posibilidad de reclamar en contra de las decisiones del ex Consejo Superior de Educación referidas al rechazo de la acreditación, pero también respecto de la decisión referida a los años por los que se otorgaba aquella. Sin embargo, durante la discusión de la ley, se intercaló la actual norma contenida en el artículo 19 bis (antes 21) pero por problemas de técnica legislativa, se omitió modificar la referencia que hacia el artículo 23 a los “dos *artículos precedentes*”.

Esta deficiencia es la que ha llevado a que la recurrida sostenga que se incluye el artículo 21, aun cuando esté derogado.

OCTAVO: Que a lo anterior cabe agregar, que la letra h) del artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de Educación, le otorga al Consejo Nacional de Educación, la facultad para conocer de los recursos de apelación en contra de las decisiones del Comisión Nacional de Acreditación, entre aquellas, también cuando no se otorga la acreditación por el período en que se había solicitado, porque tal decisión es agravante a los derechos de los Establecimientos de Educación Superior, por las consecuencias económicas e institucionales que le provoca, todo lo cual deviene en que dicha decisión es ilegal.

NOVENO: Que, a lo anterior cabe agregar que también es arbitraria porque, la negativa de la recurrida, carece de sustento, porque se ampara en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la que reiteradamente ha sido desestimada por los Tribunales Superiores de Justicia, que han rechazado esta tesis, disponiéndose en todos los casos que, debe conocer los recursos de apelación que se han deducidos por los Establecimientos de Educación Superior, respecto de la misma materia que la de autos, señalándose de manera ejemplar los roles Corte Suprema Rol N°14.978-2024; 21.447-2019 y 33.728-2019, entre otros.

DECIMO: Que la actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley de la recurrente, por cuanto se ha desconocido la procedencia de su recurso de apelación en



circunstancias que, con anterioridad, ya ha conocido de estos recursos de apelación respecto de la misma materia que el de la recurrente.

UNDECIMO: Que por todo lo precedentemente razonado, no cabe sino concluir que la presente acción constitucional será acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, **SE ACOGE, SIN COSTAS**, el recurso de protección deducido por la Universidad Diego Portales, en contra del Consejo Nacional de Educación, y, en consecuencia, se deja sin efecto el Oficio N°339/2024, de fecha 4 de diciembre de 2024, declarándose admisible el recurso de apelación, debiendo la institución dar tramitación al recurso deducido por la mencionada universidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

No firma el ministro (S) señor Fernando Guzmán, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Protección N°27242-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SCUWXWXYJW

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Marisol Andrea Rojas M. y Abogado Integrante Jorge Gomez O. Santiago, once de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a once de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SCUWXXXYJW